

Santiago, trece de noviembre de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que en el procedimiento ordinario seguido ante el Segundo Juzgado de Letras Talca, bajo el Rol C-2435-2017 y caratulado “Rivera con Valdés”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la parte demandada en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de esa ciudad de fecha siete de julio de dos mil veintitrés, que confirmó el fallo de primer grado de tres de enero de dos mil veintidós, por el que se acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.

En cuanto al recurso de casación en la forma:

Segundo: Que en el primer capítulo de su libelo de nulidad formal la recurrente invoca la causal 5ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación con el N° 4 del artículo 170 del mismo Código. Al efecto, sostiene que el daño moral no fue acreditado por la actora y que se ponderó erradamente el informe pericial acompañado por la contraria, de forma tal que esta motivación no puede ser suficiente para determinar el daño que se reclama.

En el segundo capítulo invoca la causal 4ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, por estimar que el fallo se extiende a puntos no sometidos a su decisión desde que se fijó como hecho a probar el consistente en si el actor pretendía usar el dinero sustraído para adquirir cierta maquinaria, de manera que, al conceder el daño moral con un fundamento distinto al alegado por el actor, se ha incurrido en el vicio de conceder más allá de lo pedido.

Tercero: Que revisados los antecedentes del proceso se desprende que el recurso no fue preparado en los términos que exige el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, la sentencia de primer grado sólo fue objeto del recurso de apelación deducido por la demandada y fue confirmada sin fundamentos adicionales por el tribunal de alzada. En este escenario, los reproches del recurrente atañen a vicios que se habrían cometido en el fallo de primer grado, que no fue objeto de la impugnación de nulidad formal que ahora se intenta. Lo anterior deja en evidencia que no se reclamó por la demandada, oportunamente y en todos sus grados, de los vicios que actualmente alega, razón por la cual el recurso de nulidad formal no puede prosperar.

En cuanto a la segunda causal invocada, cabe recordar que la denominada ultra petita –más allá de lo pedido– es un principio rector que ataca la falta de adecuación entre las pretensiones formuladas por las partes con lo dispositivo de la resolución judicial. Pues bien, del estudio de los antecedentes y, particularmente del libelo de la demanda y del escrito de la apelación deducida por la demandada,



se verifica que los jueces se pronunciaron exactamente sobre lo solicitado, la indemnización del daño moral causado al actor producto del robo cometido por los demandados y cuya existencia fue establecida en sede penal.

Precisado lo anterior, aparece que los argumentos del recurrente evidencian más bien una discrepancia con el razonamiento seguido por los jueces del fondo, reproche impreciso y que –eventualmente- es de carácter sustantivo y no formal, razón que también contribuye a la decisión de desestimar el recurso.

Cuarto: Que en estas condiciones procede declarar que el arbitrio en examen no está en condiciones de superar el examen de admisibilidad.

En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Quinto: Que en su reproche de nulidad del recurrente postula que en el fallo se infringe el artículo 1698 del Código Civil. Al efecto, señala que en el considerando décimo tercero de la sentencia de primera instancia se advierte que los sentenciadores han liberado a la parte demandante de acreditar el supuesto daño moral sufrido, ello por cuanto no acreditó los supuestos del daño moral que alega en su demanda, sino que, además, el tribunal concedió la indemnización por causas distintas a las alegadas por el actor.

Sexto: Que el artículo 772 N°1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, cual es, que en la presentación que contiene el arbitrio se expliciten en forma clara y precisa los preceptos que se estiman infringidos, expresando cómo se ha producido él o los errores de derecho.

Séptimo: Que, por tratarse la contienda jurídica sobre la procedencia de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, la exigencia consignada en el motivo anterior obligaba al impugnante a denunciar como infringidos los preceptos que, al ser aplicados, sirven para resolver la cuestión controvertida. En este caso, los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, normativa que tiene carácter *decisorio litis* pues sirvió de sustento a los juzgadores para acoger la demanda. Al no denunciar esta normativa genera un vacío que la Corte no puede subsanar, dado el carácter de derecho estricto que reviste el recurso de nulidad intentado.

Octavo: Que en estas condiciones el presente recurso de nulidad sustancial, tampoco podrá ser admitido a tramitación.

Por estas consideraciones y de conformidad además a lo previsto en los artículos 772, 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declara **inadmisible** el recurso de casación en la forma y **se rechaza** el recurso de casación el fondo, deducidos por el abogado Miguel Vargas Garrido, en representación de la parte



demandada, en contra de la sentencia de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca.

Regístrese y devuélvase vía interconexión.

N° 175.326-2023

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado Puga, señor Mauricio Silva Cancino, señora María Angélica Repetto García, y los Abogados integrantes señor Raúl Patricio Fuentes M. y señor Eduardo Morales R.

No obstante, haber concurrido a la cuenta de admisibilidad y al acuerdo, no firma el Ministro señor Prado, por estar en comisión de servicio y el Abogado integrante señor Fuentes, por ausencia.



XLJYXJNYRXL

null

En Santiago, a trece de noviembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

